El fraude a la Constitución (*)

por

Luis Javier Garrido (**)

(*) Ponencia presentada a invitación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República en la LX Legislatura a los Foros de Debate sobre la Reforma Energética, durante el Foro de “Análisis constitucional de las Iniciativas de Reforma Energética” el jueves 22 de mayo de 2008 en el patio de la Cámara de Senadores.

(**) Luis Javier Garrido es licenciado en Derecho por la UNAM y doctor de Estado en Ciencia Política por la Universidad de Paris I. En la actualidad es profesor por oposición de la Facultad de Derecho, donde imparte las cátedras de Teoría de la Constitución y Derecho Constitucional, y de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e Investigador Titular “C” de Tiempo Completo Definitivo del Instituto de Investigaciones Sociales de la misma UNAM, así como Investigador Nacional Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Obtuvo en 1990 la Beca Guggenheim. Es autor de **El Partido de la Revolución Institucionalizada** (Siglo XXI, 1982) y de **La Ruptura** (Grijalbo, 1993). Colabora semanalmente en los diarios **La Jornada** y **El Diario del Noroeste**.

El fraude a la Constitución

Luis Javier Garrido

México se halla ante una situación de extrema gravedad, pues se está abriendo un escenario en el que dos de los Poderes de la Unión, el Ejecutivo –aún sea de facto-- y el Legislativo, pueden concertarse para violar con una serie de leyes a la Constitución General de la República --el “acuerdo en lo fundamental” de los mexicanos, como la llamara Mariano Otero en el siglo XIX--, y llevar al país a un abismo de ilegalidad, y todo para servir a grandes corporaciones petroleras extranjeras.

El paquete de siete iniciativas que se dice son “en materia energética” enviado por Felipe Calderón al Poder Legislativo en esta primavera de 2008 --las cinco primeras el 8 de abril--, son a todas luces anti constitucionales y contrarias a los intereses de México, y han agraviado e indignado a millones de mexicanos, los que han respondido con una movilización civil sin precedentes en defensa del petróleo. Este espacio de reflexión, de diálogo y de debate fue abierto por el pueblo de México y expreso mi reconocimiento por lo mismo a dicho movimiento de resistencia popular pues sin él mismo no estaríamos hoy aquí.

Un principio fundamental de todo Estado de Derecho es el de la supremacía constitucional, conforme al cual todo el orden normativo nacional, federal o local, debe estar de acuerdo con la Constitución, como lo reconoce la propia Constitución mexicana por declaración expresa en su artículo 133. Este principio es uno de los que el gobierno de facto le exige a los legisladores que violen al aprobar una serie de leyes secundarias que entrañan decenas de normas abiertamente anti-constitucionales, pues contradicen a mandatos fundamentales de la Constitución de 1917.

La campaña mediática mentirosa del gobierno calderonista pretendiendo que Pemex no se privatiza sino que se fortalece, que los hidrocarburos seguirán siendo de la Nación y que todos los mexicanos se van a enriquecer con una medida que a todas luces lleva a un desastre económico y político, a lo único que ha conducido tras la amenaza del despojo es a agraviar profundamente al pueblo mexicano

Las iniciativas oficiales violentan toda una serie de principios centrales de la Constitución General de la República.

a) Transgreden el principio de la supremacía constitucional consignado en el artículo 131, que establece desde 1917 que la “Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”.

b) En su afán de privatizar la industria petrolera nacional, violan el principio del dominio directo, inalienable e imprescriptible de la Nación sobre todos los recursos naturales del subsuelo, y en particular de los hidrocarburos, establecido en el artículo 27, párrafos cuarto y sexto. El artículo 27 de la Constitución señala en su párrafo cuarto --en la que es su redacción original de 1917-- que: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como... los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...” Y en su párrafo sexto que: “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible”.

c) Violan el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, definido en el artículo 28, párrafo cuarto, el cual determina que: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”; agregando en su párrafo quinto que “el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo...”.

d) Trasgreden el principio de la prohibición expresa a las autoridades de otorgar concesiones ni contratos a los particulares tratándose del petróleo, establecido en el artículo 27, párrafo sexto, reformado en 1960 durante el gobierno de Adolfo López Mateos, el cual señala claramente que: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado”.

e) Violan el principio que considera a los hidrocarburos y a la petroquímica básica como un área estratégica para el país señalado en los artículos 25 y 28 constitucionales. El párrafo cuarto del artículo 25 constitucional dispone que: “El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el Artículo 28”, y éste a su vez establece en su párrafo cuarto las áreas estratégicas cuando dice que: “No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión”.

f) Violentan el principio de que no pueden existir en el país entidades públicas ni privadas sometidas a un régimen jurídico “de excepción” y al margen de la Constitución General de la República, pues en el artículo primero de ésta se establece su vigencia general en el país.

g) Como consecuencia de todo un diseño para ir entregar a grandes empresas trasnacionales áreas significativas de la industria petrolera nacional, atentan estas Iniciativas contra el principio de que el Estado debe garantizar que “el desarrollo nacional” fortalezca “la soberanía de la Nación”, tal y como lo prescribe el artículo 25, primer párrafo, con lo que, de ser aprobadas, comprometerían seriamente la independencia, la seguridad y la soberanía de la Nación y, en consecuencia, el porvenir de todos los mexicanos. El párrafo cuarto del artículo 25 de la Constitución establece en su primer párrafo que: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”, y este principio es sencillamente negado por el espíritu y la letra de las Iniciativas.

La contrarreforma propuesta no se apega a la letra ni al espíritu de la Constitución General de la República, y es evidente que no tiene otro propósito que establecer vías para poder trasgredirla. El gobierno espurio, situado ante la alternativa de cambiar principios constitucionales básicos con el riesgo de provocar tanto una revuelta social como una reacción imprevisible desde el interior del aparato estatal, optó como se ve por proseguir sobre la misma vía por la que los cuatro gobiernos que le precedieron fueron desmantelando la industria petrolera del país. Pretende que respeta a la Constitución y que sus políticas en materia petrolera no son privatizadoras pero, al mismo tiempo, va cediendo en los hechos amparado en una legislación y reglamentación violatoria de la carta constitucional, y en una operación hormiga, funciones de Pemex a diversas compañías

multinacionales, para seguir modificando de manera sorda y gradual la realidad de una industria estratégica que está dejando de pertenecer a la Nación. Busca cambiar la legislación secundaria para tratar de encubrir la violación de hecho a los principios constitucionales, como lo hicieron los últimos cuatro gobiernos, aunque ahora se trata de hacer de manera más pronunciada y cínica, en medio de una vasta campaña mediática que no hace otra cosa al pretender que no se está privatizando el patrimonio de los mexicanos que alentar el desconocimiento de los principios fundamentales de la Constitución. Está creándose así una realidad pseudo-jurídica de hecho en el ámbito energético que nada tiene que ver con los fundamentos constitucionales, con lo que de proseguirse en esta vía el país terminaría por vivir una suerte de esquizofrenia jurídica en el ámbito del petróleo: con un marco constitucional, que nadie respetaría, y una serie de disposiciones jurídicas secundarias violatorias de la Constitución, que todos invocarían.

Las Iniciativas son privatizadoras porque pretenden entregar funciones que por mandato constitucional debería ejercer únicamente la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos a corporaciones trasnacionales: tornan privadas actividades que por disposición de la Constitución mexicana deben ser sólo públicas.

Un texto legal debe entenderse por sus objetivos generales antes que por sus fines secundarios, y este paquete de iniciativas no deja lugar a dudas: se trata, en su conjunto, de una tentativa de fraude a la Constitución, pues busca establecer en la legislación secundaria normas que creen las condiciones para violar abiertamente principios centrales de la misma, y en particular el que establece la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros, todo ello, por un lado, **a)** con el propósito de dismantelar a la Nación en beneficio de los grandes consorcios petroleros y, por el otro, **b)** con el afán de someter a México a un marco jurídico trasnacional, dictado para hacer prevalecer los privilegios de las multinacionales e ir dejando así a la Constitución como letra muerta.

La revisión en detalle de los textos propuestos lleva a encontrar, por otra parte, decenas de artículos que de manera mañosa o descarada violentan el orden constitucional vigente.

□ La Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos que se propone habla, por ejemplo, sibilamente de “modernizar a Pemex” y pretende que no es privatizadora, pero a lo que tiende en realidad es a dismantelar a la que fue la empresa estatal más importante de América Latina, pues con el pretexto de dotarle de una autonomía empresarial de gestión, busca crear un Pemex al margen de la legalidad del país, blindado en un régimen de

excepción, en el que el Ejecutivo controlaría a los integrantes de su Consejo de Administración, el Poder legislativo no tendría ingerencia alguna y la sociedad no podría exigirle cuentas y en el que Pemex convendría la aplicación del derecho extranjero y la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles, todo con un objetivo central: el ir empujando a la paraestatal al mismo tiempo que se va construyendo una industria petrolera paralela, seguramente en manos de la ExxonMobil, de la Royal Dutch/Shell o de la Repsol YPF.

Uno de los principales problemas de Petróleos Mexicanos es el de la corrupción, no de los trabajadores ni del sindicato en su conjunto --como se ha pretendido--, sino de los altos funcionarios del Estado y de la paraestatal que se han aprovechado del marco de impunidad prevaleciente utilizando una empresa que es de la Nación con criterios patrimonialistas, tanto para beneficio personal y de grupo como para lubricar a un sistema político sustentado en la corrupción, y las Iniciativas de Calderón lejos de enfrentar este problema lo que hacen es agravarlo. La Iniciativa de Ley Orgánica de Pemex pretende crear nada menos que un sistema de impunidad para que el gobierno federal pueda disponer impunemente de la industria petrolera de la Nación.

Los bonos previstos en los artículos 41 y 42 de la propuesta de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos no son a su vez más que una engañifa para hacer creer a los mexicanos que Pemex sigue siendo patrimonio de todos.

□ La Iniciativa de Decreto que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal tiende a ese mismo objetivo pues un objetivo central de ésta es que sea la Secretaría de Energía, dependiente del Ejecutivo Federal, la que en un supuesto período “de transición”, sea el centro del poder en el otorgamiento y revocación de concesiones, permisos y autorizaciones en la materia, lo que contraviene de manera abierta lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, y todo ello al margen de cualquier fiscalización.

□ La Iniciativa de Ley de la Comisión del Petróleo, pretende a su vez crear una inmensa burocracia de confianza, una vez más al margen de la legalidad del país y de cualquier tipo de control, como se hace énfasis --lo que hace prever que sería una burocracia transnacional y al servicio de las multinacionales--, diseñando un organismo de carácter supuestamente técnico, dependiente del Ejecutivo, que contribuiría al control, con afanes privatizadores, del que en nuestras leyes es un espacio estratégico, para que, con una absoluta discrecionalidad, el gobierno pueda asumir

decisiones supuestamente “técnicas” pero en realidad estratégicas en el proceso de privatización de la industria y de desmantelamiento de Pemex.

□ La Iniciativa de Decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, que es sin lugar a dudas la más importante de estas pseudo-legislaciones, no parece tener otro objetivo que el de crear las mayores condiciones para la apertura a la inversión privada de las diversas actividades de la industria petrolera, lo cual está terminantemente prohibido por la Constitución mexicana. Los redactores de este texto se olvidaron por completo del principio de que una norma inferior no puede establecer principios que violen a una norma superior, como tampoco del principio de que una norma inferior no puede trastocar el contenido de aquella, y con esa perspectiva perversa buscan crear un régimen pseudo jurídico en materia petrolera que les iría permitiendo desmantelar a Pemex “a retazos”, como dice David Ibarra, y al mismo tiempo abrir la vía para que sus funciones de transporte, almacenamiento y distribución del petróleo, los hidrocarburos y la petroquímica básica puedan ser cedidas a corporaciones privadas, como se está haciendo ya también con la exploración, la perforación, la refinación y la comercialización, todo ello a través de concesiones, permisos o contratos: los ahora llamados “contratos de desempeño”, que no son más que la nueva versión de los ilegales “contratos de riesgo”, establecidos desde el gobierno avilacamachista, y prohibidos en nuestra legislación, por los que Petróleos Mexicanos cedía inconstitucionalmente a consorcios trasnacionales funciones y responsabilidades que constitucionalmente deben estar en manos de Pemex. Para ello, las modificaciones propuestas a este cuerpo legal buscan incluso redefinir, reduciéndolas, las áreas estratégicas del Estado, trasgrediendo así el artículo 25 de la Constitución.

□ La Iniciativa de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía le pretende dar a ésta también funciones privatizadoras pues, de ser aprobados estos cambios, la Comisión tendría la atribución de otorgar permisos para la prestación de servicios de transporte, distribución y almacenamiento del petróleo y de los petroquímicos básicos, lo que es contrario a los principios constitucionales establecidos en los artículos 25, 27 y 28, y abriría la posibilidad de que, como lo preconizan los dogmas neoliberales, el Estado no sea ya el único organismo que pueda determinar el control de los precios de los productos de la refinación, lo que contravendría los artículos 25 y 28 de la Constitución.

La propuesta del gobierno espurio no tiene, en otras palabras, sólo algunos vicios de inconstitucionalidad o fallas de redacción, ni es susceptible de ser “perfeccionada” o “mejorada”, como ahora se quiere proponer al estarse evidenciando en éste y otros foros su carácter anti constitucional. Todo el paquete de iniciativas es, en su esencia, contrario a la letra y al espíritu de la Constitución General de la República, al margen de toda una serie de disposiciones particulares, las que no hacen más que evidenciar que se busca instaurar una madeja de textos privatizadores, que entrañan decenas de principios contrarios al orden constitucional, que harían muy difícil en el futuro hacer prevalecer la Constitución. Poco importa por ello la retórica seudo “modernizadora” de estos textos, hecha con el afán de confundir, pues tanto en su conjunto como en sus detalles, las iniciativas son contrarias a los derechos de los mexicanos y sirven a intereses espurios, al buscar como objetivo prioritario el entregar el control de la industria petrolera de México a compañías extranjeras.

No bastaría entonces con preguntarse si estos textos enviados por Calderón al Congreso fueron redactados en algún despacho de los abogados de los petroleros de Houston, a los que les importa muy poco la Constitución mexicana, o por abogados privatistas de Los Pinos que evidencian como los anteriores un profundo desprecio a ésta y a las luchas históricas del pueblo mexicano. El hecho evidente es que al tratar de desconocer en la legislación secundaria principios constitucionales fundamentales sustentados en las luchas históricas del pueblo mexicano, se están sentando en México las bases para que se vaya edificando ese régimen permisivo y de excepción que las grandes corporaciones transnacionales exigen se establezca para venir a implantarse aquí con supuesta seguridad.

La Expropiación Petrolera de 1938, decidida para hacer prevalecer los derechos de México y de los mexicanos por sobre las ambiciones de las compañías extranjeras, se hizo con un profundo apego a la legalidad, como lo muestra el volumen publicado en 1940, a finales del sexenio de Lázaro Cárdenas¹. La tentativa de este 2008 para privatizar la industria petrolera nacional y entregar el control de este recurso estratégico de México a las transnacionales, se está tratando de hacer, violando abiertamente la legalidad constitucional del país y expidiendo una seudolegislación secundaria violatoria de la Constitución, lo que demuestra el desprecio que tienen a las leyes de los países latinoamericanos los ideólogos del Neoliberalismo, y el

¹ Cf. **El Petróleo de México. Recopilación de Documentos Oficiales del Conflicto de Orden Económico de la Industria Petrolera, con una Introducción que resume sus motivos y consecuencias**, México, Gobierno de México, Talleres de la Editorial Cvltrva, 1940, LIV-928 pp.

encono particular contra la Constitución mexicana que consagra el principio del dominio de la Nación sobre sus recursos estratégicos.

En términos llanos, la disyuntiva del país es muy clara: lo que México requiere es una industria petrolera nacional vigorosa y moderna, y lo que se pretende es todo lo contrario: destruir a lo que queda de ésta y suplirla con una en manos extranjeras, como era el caso antes de 1938, y al mismo tiempo hacer de las leyes mexicanas un instrumento al servicio del capital trasnacional, dejando a la Constitución como un texto sin validez. Es eso y no otra cosa es lo que el gobierno de facto le está solicitando a ustedes legisladores, y lo repite todos los días en sus discursos: que al aprobar estos aberrantes cuerpos legales secundarios contribuyan a destruir la Constitución del 17, que aún sus más férreos detractores no pueden ignorar que en sus principios centrales es la expresión de las mejores luchas del pueblo mexicano.

La “reforma energética” de Calderón no es en síntesis “reforma” ni es “en materia energética”, sino que constituye un paquete de cambios legales sobre la industria petrolera nacional a la que pretende privatizar, y que conducen a un desmantelamiento de la Nación y a una verdadera contrarreforma del Estado. En lo inmediato las privatizaciones permitirían al gobierno en turno disponer de cuantiosos recursos y contribuirían a que la mafia gobernante hiciera descomunales negocios, pero en un muy corto plazo el gobierno mexicano perdería no sólo el control de un sector estratégico de la economía y del desarrollo sino que carecería de recursos fundamentales que hasta ahora han contribuido de manera determinante al desarrollo del país, y México pasaría del rango de país soberano e independiente al de ser un protectorado de Estados Unidos.

El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad en este momento de definiciones cruciales de defender los fundamentos de la constitucionalidad mexicana, y no puede soslayarse el hecho de que la propuesta oficial contraviene en lo esencial otro de los principios del artículo 27 constitucional: el que sustenta la soberanía nacional sobre sus recursos estratégicos como una vía para garantizar la satisfacción de las necesidades nacionales y para fortalecer la seguridad del país. Los documentos enviados por Calderón no sólo conducen empero a la inseguridad energética, ya que este recurso natural de México sería controlado progresivamente por las grandes trasnacionales, sino que de ser aprobados comprometerían seriamente la seguridad nacional pues México sería para la lógica imperial de las grandes potencias, y en especial para Estados Unidos, un territorio bajo su supuesta jurisdicción, mucho más de lo que lo pretendían era en los años previos a la Expropiación Petrolera. La explotación en territorio

mexicano, que es innecesaria técnicamente, de los yacimientos transfronterizos o en las aguas profundas, en los que tanto se insiste, constituiría en términos geopolíticos un error histórico de consecuencias desastrosas para el futuro de México.

La propuesta de Calderón es inviable en términos constitucionales porque con ella se cancelaría cualquier posibilidad de que haya en el futuro políticas integrales de Estado en materia energética, violándose en consecuencia el espíritu y la letra del artículo 25 constitucional, el cual confiere al Estado “la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable” y, sobre todo, “que fortalezca la Soberanía de la Nación”, dejando al país a merced de lo que los neoliberales llaman “las fuerzas del mercado”, es decir a expensas de la codicia de las multinacionales petroleras y del poder militar estadounidense, y sometido además en la materia a tribunales internacionales.

Los falsos argumentos que se han vertido en el sentido de que algunos textos fundamentales de la Constitución que establecen el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros no fueron redactados en 1917 sino que son consecuencia de ulteriores adiciones, pretenden ignorar que una Constitución es producto de un proceso histórico, y que la legislación constitucional mexicana en materia de petróleo es el resultado de las luchas y movilizaciones de miles de mexicanos: desde los trabajadores que en los campos de las compañías petroleras inglesas y estadounidenses resistieron en décadas de exacción, y los dirigentes políticos y los intelectuales que impulsaron desde los años veinte la tesis de la nacionalización y el pueblo que respaldó al Presidente Lázaro Cárdenas en el conflicto con las empresas extranjeras, hasta los miles de trabajadores que durante décadas edificaron a lo largo del siglo XX a Pemex como una empresa que llegó a ser orgullo de América latina.

Los tiempos han cambiado mucho desde la Expropiación Petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas en uno de los actos determinantes de la historia de México, y los desafíos de hoy en día son de otra dimensión. Pocos años después de la Expropiación, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, luego de entrevistarse en 1943 con el general Manuel Ávila Camacho en Monterrey (Nuevo León) y en Corpus Christi (Texas), preveía sin embargo otro horizonte, pues tras expresar entonces al presidente mexicano su agradecimiento porque México hubiese concluido arreglos de indemnización con las compañías norteamericanas e inglesas expropiadas, expresó palabras que parecen una

ironía de la Historia.² “Ha pasado ya definitivamente –dijo Roosevelt-- la época de explotación de los recursos y del pueblo de un país para beneficio de un grupo de otro país”.³

El Presidente Roosevelt se equivocaba, y desde el último tercio del siglo XX el petróleo se ha tornado en el mundo en el recurso estratégico de mayor importancia y por lo mismo su explotación supone un riesgo muy grande para las Naciones soberanas. Estas Iniciativas de cambios legales entrañan por lo mismo un peligro muy grande para México pues violan el principio fundamental establecido en el artículo 28, párrafo cuarto, de que el Estado al ejercer sus funciones en las áreas estratégicas, “protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación”. Lejos de ello, de aprobar estas iniciativas, los legisladores comprometerían seriamente la seguridad de nuestro país y propiciarían un serio menoscabo de la soberanía nacional al entregar de manera abierta sectores significativos de la industria petrolera a las transnacionales, por las razones expuestas pero también por una de carácter geopolítico: lo mismo con los contratos a corporaciones extranjeras para explorar las aguas profundas del Golfo o realizar tareas de refinación que incluso con cualquiera de los contratos de incentivo, todo lo cual es violatorio de la Constitución, el gobierno de facto con la complicidad del Legislativo convertiría a México en un objetivo militar del Pentágono. La doctrina de seguridad nacional estadounidense, redefinida por George W. Bush desde 2002, establece claramente que Washington se arroga el derecho de intervenir militarmente en los países donde tiene intereses petroleros, es decir lo mismo en Irak y en Afganistán que en los países de América Latina, por lo que de ceder el Congreso de la Unión a esta demanda aberrante del gobierno de facto se cometería un atentado contra América Latina al hacer de México un posible objetivo militar de Washington.

² México había concluido arreglos con las compañías pagando justa y equitativamente, las indemnizaciones por los bienes expropiados: en 1942, con el Grupo “Imperio” (que detentaba sólo el 1% de la industria), y en 1943 con el grupo principal de empresas norteamericanas, encabezado por la Standard Oil de New Jersey --dueña de la Huasteca Petroleum Company-- (que detentaba el 18.5% de la industria), concluido por el convenio Zevada-Cooke, aprobado por el Senado estadounidense, así como con “El Águila”, el más importante desde el punto de vista político, pues esta empresa británica representaba la mayor parte de la industria petrolera de México al detentar el 70.5 de la misma, teniendo la mayor parte de su producción en Poza Rica y en el Sur, como la mayor parte de sus oleoductos, mientras sus refinerías se hallaban en Tampico, Poza Rica, azcapotzalco y Minatitlán. Cf. Antonio J. Bermúdez y Octavio Véjar Vázquez, **No dejes crecer la hierba... (El Gobierno Avilacamachista)**, México, B. Costa-Amic, Editor, 1969, pp. 258-260.

³ Citado por Antonio J. Bermúdez y Octavio Véjar Vázquez, **op. cit.** p. 260.

La Cámara de Senadores ha sido negligente en el pasado en asumir la responsabilidad que le da el artículo 76, fracción I, de “analizar la política exterior” del gobierno, facultad que supone velar por la soberanía y la seguridad del país, y este abandono ha propiciado que los gobiernos mexicanos tengan por su entreguismo una capacidad de decisión cada vez menor y México esté dejando de ser un país soberano. La subordinación de los últimos gobernantes del PRI y del PAN a intereses del extranjero es consecuencia de la creciente corrupción de la llamada “clase política” a la que no le ha importado abandonar de manera progresiva los principios constitucionales en abierta complicidad con fuerzas del exterior, en decisiones de hecho que no de Derecho, las que han llevado a que Washington tenga ya una importante ingerencia en el control del aparato estatal mexicano y en especial de la frontera, de las aduanas, de los litorales y del espacio aéreo, así como de la seguridad interna de México, a lo que se agregaría, de aprobarse este paquete de iniciativas, el hecho aberrante de que las multinacionales extranjeras darían un paso muy importante en su objetivo de controlar de manera absoluta el principal recurso natural de nuestro país. Los recursos básicos mexicanos, que deberían ser de importancia estratégica para México, de aprobarse estas iniciativas lo serían para Estados Unidos, colocándose a nuestro país en un marco de extrema vulnerabilidad frente a las políticas imperiales de la Casa Blanca.

Las lecciones de la Historia no pueden desdeñarse en el momento crucial que estamos viviendo. Un testigo de los acontecimientos nacionales del siglo pasado, recuerda como la historia del petróleo mexicano posterior a la Expropiación fue siempre de avances y retrocesos, de claudicaciones y de complicidades de gobernantes, que cedieron en el otorgamiento de “contratos de riesgo” a las trasnacionales, como aconteció en los años de Ávila Camacho y Alemán, pero también de lucha de las organizaciones sociales y de muchos mexicanos, que en todo momento del siglo XX pugnaron por construir una industria nacional autosuficiente. Adolfo López Mateos, político de claroscuros, quien en la campaña electoral de 1958 sostuvo que “en el petróleo nacionalizado, ni un paso atrás” y posteriormente auspició la reforma al párrafo cuarto del 27 constitucional hoy vigente, se enfrentó a una creciente oposición panista, cuyo programa en lo que se refería al manejo de los recursos petroleros de la Nación — refiere— era, como ahora, el mismo que habían tenido las compañías petroleras cuando, aprovechando su fuerza económica y el poder que esa fuerza les permitía, mantuvieron en una inestabilidad constante a la Nación, a su economía y a su gobierno”. La derecha mexicana, según reconocía entonces, se opuso expresamente el texto de la “reforma constitucional del

Artículo 27, ignorando que el destino de una Nación está en el horizonte que su futuro le traza y de ninguna manera en el regreso “al pasado”.⁴

Para dismantelar a la Nación los gobernantes neoliberales entendieron desde hace décadas que era menester dismantelar el orden legal del país, y hoy esto es más evidente que nunca. La privatización de la industria petrolera nacional por la vía de burlar a la Constitución expidiendo una legislación secundaria que la trasgrede o simplemente ignorándola por la vía de los hechos, no es nueva desde luego, pues desde el primer gobierno neoliberal que tuvo México encabezado por Miguel de la Madrid, se fueron privatizando soterradamente, de esta manera, espacios energéticos clave, pero nunca se había llegado tan lejos en la violencia contra la Constitución como con esta propuesta de Calderón.

La privatización de la industria petrolera mexicana ha sido en el último cuarto de siglo un largo proceso de violaciones al marco jurídico mexicano y al artículo 27 constitucional por la vía de modificar una reglamentación secundaria o simplemente por medidas administrativas que han pretendido darle la vuelta a la ley, y que han terminado por violar letra y espíritu de la Constitución. Los mecanismos utilizados en el pasado fueron dos sobre todo: **a)** la modificación a la normatividad secundaria para privatizar la petroquímica y **b)** los llamados “contratos de servicios múltiples” para privatizar diversos ámbitos en todo el proceso productivo, y ahora se insiste en ellos. La privatización de la industria petroquímica se inició en el sexenio de Miguel de la Madrid cuando éste recurrió en 1986 al subterfugio de modificar la norma reglamentaria para reclasificar como productos petroquímicos secundarios (en los que legalmente se permite la inversión privada nacional o extranjera) a un buen número de productos básicos, que entonces se redujeron de 70 a 34, y se acentuó en el sexenio de Salinas, que en 1989 reclasificó de nuevo los productos básicos, reducidos entonces de 34 a 20, al aumentar de manera notable los secundarios, lo que permitió en 1995 al gobierno de Ernesto Zedillo empezar a poner en venta las plantas petroquímicas, hasta llegar a la situación actual en la que sólo quedan 8 productos petroquímicos considerados como básicos y la industria petroquímica se halla en los hechos en manos de consorcios trasnacionales, proceso que no pudo ser frenado siquiera en 1995 cuando se reformó la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional para establecer que la inversión estatal en esa área debería ser del 51 por ciento.

⁴ Francisco Arellano Belloc, **La Exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros**, México, Editorial Comaval, S.A., 1958, pp. 39-44.

El proceso de privatización se hizo por otra parte más encubierto en los años de Salinas cuando se estableció la práctica administrativa de la subcontratación a empresas privadas de áreas que Pemex argumentaba no poder atender, como fueron primero el mantenimiento, la distribución y el transporte, lo que se amplió poco después a la exploración, la perforación y la comercialización, actividades en las que se fueron progresivamente entregados espacios clave a corporaciones trasnacionales, a través primero de los llamados “contratos de riesgo”. Este proceso, que el gobierno de Vicente Fox buscó acentuar dándole una apariencia de “legalidad” al establecer los llamados “contratos de servicios múltiples”, pero que no pasó de constituir un fraude a la Constitución, ha sido claramente violatorio de los artículos 27 y 28, y su consecuencia es que áreas estratégicas significativas del desarrollo del país se hallan ya en manos del capital extranjero, habiendo logrado los gobiernos neoliberales su objetivo de crear una confusión deliberada en la materia y una situación de hecho contraria al marco constitucional, que cada vez es más difícil revertir.

El gobierno de facto le exige además al Congreso de la Unión que al aprobar esta legislación secundaria que trasgrede abiertamente el marco constitucional, convalide de paso una serie de actos violatorios de la Constitución de los titulares del Ejecutivo Federal, que en el pasado reciente han contribuido a destruir el orden constitucional mexicano llevando al país a un escenario de anarquía en donde sólo está empezando a prevalecer la fuerza de las multinacionales. Le está exigiendo, en este sentido, que implícitamente **a)** convalide a posteriori una serie de practicas anti constitucionales en materia de energía y de hidrocarburos desarrolladas en los últimos 25 años, y que suponen la violación en los hechos de la Constitución, llegando hasta casos escandalosos como el de la Cuenca de Burgos o el de los contratos anti constitucionales celebrados ya por Pemex para las aguas profundas del Golfo de México;⁵ **b)** “legitime” la trasgresión al marco constitucional del país hecha en el pasado, y que se deriva de la expedición de una normatividad secundaria en materia de petróleo y de energéticos; y **c)** apruebe el establecimiento de un régimen de excepción en materia de energía para que el Ejecutivo pueda crear en México una industria petrolera paralela en manos de las trasnacionales al mismo tiempo que prosigue desmantelando a Pemex. El gobierno de facto le pide en suma a los legisladores que creen un clima de violencia anti constitucional, que permita seguir violando a la Constitución, y en especial a los priístas y a

⁵ Israel Rodríguez, “Pemex dio contratos a firma noruega en quiebra para que perfore el Golfo”, **La Jornada**, 13 de abril de 2008, primera plana y pág. 5.

los perredistas que de paso violen los principios estatutarios de sus propios partidos ⁶.

Petróleos Mexicanos no es desde luego cualquier empresa de Estado; ha sido la principal empresa de América Latina, que a lo largo de tres cuartos de siglo y sorteando todo tipo de amenazas ha sustentado la vía para un desarrollo independiente del país y permitido la construcción del México moderno: ha sido el fundamento de la economía mexicana del siglo XX, un orgullo para los mexicanos y un símbolo para todos aquellos que en el continente aspiran a recuperar el dominio de sus recursos estratégicos. Pero la trasgresión al orden constitucional que el gobierno espurio de Felipe Calderón pretende se haga a la Constitución Mexicana, no es tampoco cualquier cosa; no se trata, en efecto, de trasgredir o de burlar tan sólo una serie de principios normativos del país y de esa manera ir desincorporando el petróleo de la soberanía y del patrimonio nacionales, como se regocijan en evidenciarlo los panistas, pues lo que está en el centro del debate no es cualquier texto legal. De lo que se trata a través de esta contrarreforma es de violentar y dejar sin efecto, volviéndolos letra muerta en los hechos, algunos de los artículos fundamentales de la Constitución mexicana --el 25, el 26, el 27 y el 28--, que constituyen el fundamento de la Constitución expedida en 1917, pues le dan un sentido a ésta, ya que están ahí consagrados los derechos originarios de la Nación sobre el subsuelo, el carácter estratégico de la riqueza petrolera de México y el principio de la exclusividad del Estado en el manejo de sus recursos petroleros: principios que chocan con el fanatismo ideológico neoliberal. Textos que, en un sentido más amplio, constituyen el meollo del “acuerdo fundamental” entre los mexicanos.

La tendencia actual en el mundo en los países productores de petróleo es hoy en día la de fortalecer a las empresas estatales de hidrocarburos como una vía imprescindible para el desarrollo y resulta por ello paradójico que en este contexto, marcado además en América Latina por el fracaso estrepitoso del modelo neoliberal, que el gobierno espurio de Calderón sin ninguna imaginación ni criterio presente esta propuesta que no significa más que la abdicación absoluta del grupo gobernante de sus responsabilidades en aras de crear un escenario de corrupción.

⁶ La Declaración de Principios del Partido Revolucionario Institucional vigente, aprobada por la 4ta. Asamblea Nacional Extraordinaria de 2007, defiende en relación a los energéticos en su punto 14, “el principio constitucional de propiedad de la Nación”, y se pronuncia de manera contundente en materia energética “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.

La pretensión del gobierno de facto de destruir a Pemex y entregar la industria petrolera a las multinacionales es de tal manera descabellada y contraria a los intereses de los mexicanos, que no puede entenderse únicamente por el fanatismo ideológico neoliberal de los panistas y de algunos de sus aliados priístas, por su odio patológico al Estado y a la legalidad que representa la Constitución de 1917 o por la avidez que tienen en el marco de corrupción que han creado por aprovecharse sin límites del proceso privatizador, sino por otra sinrazón: su sumisión al capital trasnacional y al proyecto de éste de dismantelar no al Estado sino a la Nación. Las evidencias de que ciertas fuerzas trasnacionales se hallan tras estas Iniciativas no dejan de multiplicarse y muchos testimonios existen en el sentido de que el llamado Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), nacido formalmente para “mejorar la seguridad regional” está siendo utilizado en realidad para subordinar a México y someterlo a las tesis sobre energía de los consorcios trasnacionales más radicales.

La Cámara de Senadores no tiene por lo mismo, en términos de Ley, más alternativa que la de desechar las iniciativas de Calderón por notoriamente improcedentes para no forzar a una discusión en el pleno sobre un texto que no oculta que pretende, nada menos, que crear las condiciones para violar la Constitución y las leyes de México, y crear un régimen de excepción a una nueva industria petrolera en manos de extranjeros, a fin de propiciar la impunidad para los grandes consorcios petroleros para la explotación, sin límites y sin control, y al margen de cualquier legalidad constitucional, de las riquezas básicas de México: lo que los Neoliberales llaman la plena desregulación. Desecharla y enviarla a donde debería estar: el basurero de la Historia.

El México del siglo XXI reclama su derecho a decidir y estas Iniciativas pseudo-legales de Los Pinos para crear un nuevo marco de hecho en materia petrolera a fin de privatizar la empresa más importante del país y trastocar la economía nacional e incluso la naturaleza del régimen político, no hay duda de que desde una perspectiva democrática deberían ser consultadas a todos los mexicanos en una amplia consulta popular. Nadie puede tener argumentos para oponerse a ello, porque la Constitución mexicana prevé desde 1983 el mecanismo de la Consulta Popular en el tercer párrafo del Artículo 26 y en la mayoría de las Constituciones locales existen mecanismos de democracia semi directa como el Plebiscito, el Referéndum y la Consulta Popular. Si el régimen de facto se opone a que se someta a los mexicanos su propuesta es por la certeza que tiene de que será rechazada por el pueblo.

La experiencia política que deja esta tentativa de un gobernante ilegítimo y puesto al servicio de las trasnacionales por dismantelar el orden constitucional mexicano, plantea la necesidad de defender a la Constitución mexicana reformándola en dos aspectos fundamentales, que a la vez que fortalezcan el consenso social abran la vida democrática a una mayor participación antes de que se siga intentando trastocar su esencia. La primera reforma sería la de establecer que hay tres principios fundamentales en el marco constitucional que no pueden ser tocados por ningún órgano revisor de la misma en los términos previstos en el 135 constitucional, tanto por entrañar valores universalmente reconocidos como por haber incorporado decisiones fundamentales de nuestra historia, y que son **a)** los derechos individuales, **b)** los derechos colectivos y sociales y **c)** los derechos de la Nación sobre sus áreas estratégicas, como es el caso del petróleo.⁷ La segunda reforma ha sido demandada con insistencia en los últimos años, y es que el régimen de México debe dejar de estar sólo sustentado en una democracia representativa y tornarse en el futuro en una democracia semi-directa, estableciéndose en la Constitución junto con la Revocación del Mandato y la Rendición de Cuentas, las formas de participación ciudadana que al ampliar la democracia están caracterizando al siglo XXI: el Plebiscito, el Referéndum y la Consulta, como vías necesarias para todas las modificaciones a la Constitución y a las leyes fundamentales.

México requiere de una industria petrolera vigorosa, que siga siendo entendida en su conjunto como un recurso estratégico de la Nación, y que para cumplir sus fines debe estar exclusivamente en manos de la autoridad estatal como lo establece la Constitución. Petróleos Mexicanos debe modernizarse permitiéndosele utilizar sus propios recursos, pero no en el sentido que lo plantean los neoliberales de ponerse al servicio de una industria privada paralela en manos de las trasnacionales a la que le iría cediendo sus funciones, sino para contribuir de manera cada vez mejor al bienestar de los mexicanos y a salvaguardar la seguridad energética del país. Debe ser una gran empresa del Estado en la que se reinviertan los excedentes petroleros, fortalecida por un Instituto Mexicano del Petróleo al que se debe dar un nuevo impulso a fin de que colabore a la tarea de lograr un desarrollo científico y tecnológico propio.

⁷ En este sentido se han pronunciado recientemente en México diversos constitucionalistas. Cf. Emilio Krieger, **En Defensa de la Constitución. Violaciones presidenciales a la Carta Magna**, México, Editorial Grijalbo, 1994, pp. 24-27; y Alejandro del Palacio Díaz, **Nuevas Lecciones de Teoría Constitucional**, México, Compañía Editorial Impresora y Distribuidora, 2006, pp. 129-138.

La Expropiación Petrolera de 1938, decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas, permitió la construcción del México moderno, la integración de la Nación y la refundación del Estado posrevolucionario. La privatización de la industria petrolera nacional que el actual grupo gobernante busca culminar con la entrega de Pemex a las trasnacionales, entrañaría no sólo un despojo a la Nación y el desmantelamiento de la Constitución General de la República y del Estado Mexicano sino que conduciría a un escenario social de desastre. El gobierno de facto tendría entonces que enfrentar a un pueblo agraviado, que no va a estar dispuesto a aceptar esta imposición, y que se halla decidido a mucho más de lo que desde el poder político se supone, y ello porque ha entendido que defender al petróleo es una cuestión de supervivencia, pero también de dignidad.